

**COLOMBIA:** El presidente Álvaro Uribe Vélez hizo un llamamiento a la guerrilla de las FARC a entrar en un proceso de desmovilización total o “buscar seriamente y con fe procesos de paz”. El llamado del mandatario fue efectuado en medio de declaraciones de agradecimiento al gobierno de Panamá, por una acción militar contra las FARC en la que murieron tres guerrilleros en una zona panameña cercana a la frontera común con Colombia. Días después, un comunicado oficial de esta organización guerrillera hace un recuento de hechos, en los cuales destaca la participación de la Guardia de Frontera de Panamá en acciones en su contra en suelo y aguas territoriales de Colombia. Asegura el comunicado que pese a la intervención de Panamá en las hostilidades, jamás atacarán a las fuerzas de seguridad del vecino país, por cuanto su lucha es exclusivamente contra el Estado colombiano. A esta situación se suma la denuncia que hiciera Denis Blair, director de la Agencia Nacional de Inteligencia de EEUU, que agrupa a todas las agencias de seguridad de ese país incluidos el FBI y la CIA, en su “Evaluación Anual de Amenazas contra la Seguridad Nacional”, en la que señala que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, brinda apoyo encubierto a las FARC. Informes anteriores habían señalado a Venezuela como un santuario de las FARC, pero nunca se había hablado directamente de “apoyo encubierto”. Entretanto, el gobierno de Nueva Zelanda incluyó a la guerrilla de las FARC en su lista de organizaciones terroristas, como un acto de reafirmación de su compromiso en la lucha internacional contra el terrorismo, así lo explicó a los medios de prensa el primer ministro John Key. Mientras esto ocurría, en Colombia la Policía Nacional asumía oficialmente la relación con la INTERPOL, en la que se destaca el compromiso conjunto para dar captura a 685 personas de las cuales el 70% corresponden a guerrilleros de las FARC y ELN reseñados en circulares rojas de búsqueda y captura. *CMI – Tv, ANNCOL, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 30/01/10 – 12/02/10*

Luego que se conociera que mediante las gestiones de un grupo de ciudadanos, debidamente autorizados por el Gobierno, se logró un pacto entre bandas delincuenciales en la ciudad de Medellín, para parar la escalada de homicidios producto de sus enfrentamientos por la disputa de territorios para el negocio del narcotráfico, se desató una fuerte controversia, por cuanto el Gobierno sorpresivamente desconoció el pacto logrado y retiró la autorización al grupo de ciudadanos, conocidos como el Grupo de Notables conformado por el jurista, académico y miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Jaime Jaramillo Panesso, el ex dirigente del ELN Francisco Galán y el obispo de la diócesis de Medellín Monseñor Alberto Giraldo, a quienes señaló de haber perdido el rumbo trazado, según el cual ningún pacto entre bandas delincuenciales puede sugerir beneficios jurídicos, y que la actuación del Grupo de Notables debía haberse limitado a obtener el sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Por su lado, los notables han rechazado el trato desobligante del Gobierno y reiteran que continuarán con sus labores de buscar frenar los enfrentamientos, los que tienen un hondo impacto en los derechos a la vida y a la paz consagrados en la Constitución Nacional, la que a su vez establece como un deber de obligatorio cumplimiento trabajar por la preservación de estos derechos. *El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Caracol – Radio, RCN – Radio, Presidencia, CMI – Tv, Semana, 30/01/10 – 12/02/10*

La ONG estadounidense Human Rights Wacht (HRW), en su mas reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, establece que las nuevas organizaciones paramilitares, surgidas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siguen cometiendo graves atrocidades y tienen presencia en la mayoría de los departamentos del país. José Miguel Vivanco, director de HRW, al presentar su informe titulado “Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia”, aseguró que los abusos son generalizados y que el gobierno no hace un esfuerzo serio para romper los vínculos, denunciar y castigar. Dijo el señor Vivanco que “Vemos una actitud pasiva del Gobierno e incluso un discurso que minimiza el problema” y agregó que estos grupos paramilitares cometen habitualmente

masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales, extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia. Vivanco asegura que estas organizaciones estarían integradas por cerca de 10.000 miembros y que operan en 24 de los 32 departamentos de Colombia. Los grupos están comandados por mandos medios de los antiguos grupos paramilitares y siguen el mismo patrón de las desmovilizadas AUC. Tanto el informe de HRW como las declaraciones de Vivanco fueron rechazadas por el Gobierno, quien las tildó de sesgadas, de desinformadas y de estar contaminadas por una intencionalidad política. En una declaración oficial, el Gobierno asegura que el paramilitarismo en Colombia está extinguido. Entretanto, el director del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la Central Unitaria de trabajadores (CUT), Alberto Vanegas, denunció que durante el año 2009 fueron asesinados 40 sindicalistas, cifra que coloca a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer el derecho a sindicalizarse. Esta cifra significa que el 60% de los asesinatos de sindicalistas asesinados en el mundo el año pasado fueron colombianos. El dirigente sindical reveló, además, que desde 1986, año de creación de la CUT, han sido asesinados en Colombia 2.721 sindicalistas, crímenes que hasta la fecha se encuentran en la más absoluta impunidad, constituyéndose en todo un genocidio del movimiento sindical, remarcó el señor Vanegas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales colombianas denunciaron una nueva ola de amenazas contra líderes de mujeres en situación de desplazamiento forzado por parte de organizaciones paramilitares. La Red Nacional de Mujeres reveló que la Corporación SISMA MUJER, que defiende los derechos de las víctimas del desplazamiento, ha recibido en lo corrido de este año siete boletines con amenazas de muerte por parte de la banda paramilitar "Águilas Negras". La Red Nacional de Mujeres reclama al Gobierno medidas cautelares y de protección para las mujeres y sus asociaciones de víctimas. *CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol – Radio, Presidencia, 30/01/10 – 12/02/10*

Por otro lado, no cesan las acusaciones directas al presidente Álvaro Uribe Vélez de ordenar labores de espionaje ilegal y persecución contra sindicalistas y periodistas en Colombia. En sendas denuncias quien fuera el hombre de confianza del presidente en el DAS, el ex – director Jorge Noguera quien comparece ante la justicia por la infiltración del paramilitarismo y del narcotráfico en el DAS, confesó que recibió ordenes directas del presidente Uribe para espiar ilegalmente a sindicalistas y opositores del gobierno. Noguera aseguró que presentaba periódicamente informes al Jefe de Estado sobre espionaje a sindicalistas. Entretanto, el periodista Hollman Morris y la periodista Claudia Julieta Duque reclamaron responsabilidades políticas del presidente Uribe, por la persecución a la que ha sido sometido el periodismo y la oposición en Colombia, por cuanto el DAS organismo desde el que se realizaron toda una gama de actividades ilícitas, es la más alta instancia de inteligencia y seguridad nacional que está subordinada directamente al jefe del Estado, por lo cual sus actividades no podían ser desconocidas por el mandatario. *El Tiempo, El Espectador, CMI – TV, Caracol – Radio, Voz, 30/01/010 – 12/02/10*

Finalmente, el presidente Uribe aseguró que pese al recorte en la financiación del Plan Colombia, EEUU seguirá siendo el más importante aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El mandatario explicó que el recorte de 50 millones de Dólares respecto del año anterior, se debe al déficit fiscal de los EEUU y que es del todo comprensible y previsible que Colombia empiece a asumir paulatinamente las tareas y costos del plan. Entretanto, el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, aseguró que Colombia busca para los soldados nacionales que irán a Afganistán, las mismas condiciones de inmunidad e impunidad que tienen los soldados de los EEUU en el país asiático, que a su vez las tienen en Colombia, en el marco del establecimiento de siete bases militares de EEUU en suelo colombiano, las que contarán con una presencia de 1.400 entre militares y contratistas civiles. Dijo el alto funcionario que "queremos para nuestros soldados un trato equivalente a los de las demás misiones que se encuentran en Afganistán". *Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, 30/01/10 – 12/02/10*